

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por MARTHA LUZ GÓMEZ DE RIVERA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-012-2018-00014-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Daniela Echeverry García, con tarjeta profesional No. 275.505 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Jaime de Jesús Rivera Castaño a partir del 27 de mayo de 2015, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó con base a los siguientes fundamentos fácticos: El 27 de mayo de 2015 falleció por causas de origen común Jaime de Jesús Rivera castaño, quien se encontraba pensionado por Colpensiones y con quien estuvo casada por el término de 48 años, manteniendo vigente el

vínculo matrimonial, unión de la que procrearon 10 hijos, de los cuales fallecieron 2. Mediante resolución GNR 337969 del 28 de octubre de 2015 Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes en un 100% a Luz Deira Hernández de Sosa en calidad de compañera permanente, misma que falleció el 31 de agosto de 2017. El 07 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la prestación, la que fue negada por Resolución GNR 228145 del 13 de octubre de 2017 por encontrarse en firme el acto administrativo que reconoció el derecho a la señora Hernández Sosa. El 15 de noviembre de 2017 interpuso los recursos de ley.

COLPENSIONES dio respuesta oportuna al líbello con oposición a lo pretendido por no estar satisfechos los requisitos legales para acceder a la prestación. Aceptó las muertes del pensionado y su beneficiaria y la reclamación efectuada con su negativa. Afirmó no contarle los demás fundamentos fácticos por corresponder a la vida privada de la solicitante y propuso como excepciones de mérito las que nombró como Inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

Surtido el trámite de rigor, el 04 de marzo de 2020 el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria; sin embargo, entre el minuto 38:00 cuando finalizan los alegatos de conclusión y hasta el minuto 1:00:10 cuando se solicita una aclaración de la sentencia proferida, el audio se mantiene mudo, lo que conllevó a que por auto del 05 de mayo de 2022 se dispusiera la devolución del expediente para su reconstrucción.

Consumada la gestión por parte del Juzgado de origen el 26 de agosto de 2022, el asunto reingresó de cuya providencia se extrae la declaratoria del derecho que le asistía a la demandante de la pensión de sobrevivientes desde el 27 de mayo de 2015 con disfrute a partir del 01 de septiembre de 2017 en cuantía de \$864.896 por 13 mesadas al año. Se CONDENÓ a Colpensiones a pagar la suma de \$30.032.084 como retroactivo pensional causado del 01 de septiembre de 2017 al 29 de febrero de 2020, y seguir reconociendo a partir del 01 de marzo de 2020 una mesada por \$964.197 sin perjuicio de los

incrementos anuales y la mesada adicional de diciembre. Se CONDENÓ a Colpensiones a reconocer la indexación, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios. Se AUTORIZÓ a Colpensiones a descontar del mencionado retroactivo los aportes en salud. Se CONDENÓ en costas a la demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.500.000.

La mandataria judicial de la demandada busca la revocatoria de la decisión, por considerar que Martha Luz Gómez aceptó en su interrogatorio de parte que convivió con el causante hasta el año 1989 reconociendo en la señora Luz Deira su calidad de compañera permanente, por lo que al no acreditarse los 5 años anteriores a la muerte que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para hacerse beneficiaria de la prestación, no hay lugar a lo pretendido, haciendo énfasis en la providencia SL1730-2021 en la que se destacó la importancia de esos 5 años compartiendo la pareja techo, lecho y mesa. Igualmente adujo no ser procedente la condena en costas en tanto había un conflicto de beneficiarios que debía resolverse ante los Jueces de Trabajo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Jaime de Jesús Rivera Castaño le fue reconocida una pensión de vejez por medio de la Resolución N° 023258 de 2006 (Págs. 111-115 Archivo 01) a partir del 30 de agosto de 2006 en cuantía de \$45.242, mismo que pereció por causas de origen común el 27 de mayo de 2015 (Pág. 28 Archivo 01). Que mediante Resolución GNR 337969 del 28 de octubre de 2015 le fue reconocida la pensión de sobrevivientes en un 100% a Luz Deira Hernández de Sosa en su calidad de compañera permanente (Pág. 24 Archivo 01), misma que falleció el 31 de agosto de 2017 (Pág. 30). Por resolución GNR 228145 del 13 de octubre de 2017 le fue negada la prestación a la demandante por encontrarse en firme la decisión anterior (Págs. 24-27 Archivo 01).

Acorde a lo anterior y a los argumentos de la alzada, a más de la revisión en consulta de la providencia en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si Martha Luz Gómez de Rivera acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa de la muerte del pensionado Jaime de Jesús Rivera Castaño ocurrida el 27 de mayo de 2015. De ser ello así, habrá de definirse el quantum de la prestación, y si hay lugar a la indexación ordenada y a las costas impuestas.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el óbito del pensionado el 27 de mayo de 2015, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que en su literal a) señala como beneficiarios de la prestación *“en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”*.

... Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

Así, para quien pretenda ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, caso que tratándose de un pensionado, no se

encuadra en la discusión promovida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia con la Corte Constitucional frente al alcance otorgado en sentencia SL1730-2020 al término de convivencia, en el que aduce que solo es exigible en caso de muerte del pensionado y no del afiliado.

Adicionalmente, dadas las circunstancias específicas del caso la H. Corte Suprema de Justicia también en su interpretación literal de la norma, le dio una especial relevancia al concepto de unión conyugal y en ese sentido, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del fallecido durante sus últimos años de vida, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso, sino en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.

Ello naturalmente, presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte vínculo afectivo, comunicación solidaria y ayuda mutua que permita considerar que los lazos familiares siguieron vigentes, señalándose por la Corporación en sentencias como la SL1869-2020, SL2015-2021, SL5260-2021 y SL2318-2022 que ello se configura en un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b) artículo 13 Ley 797 de 2003, ya que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido, contenido e interpretación que encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto.

Se clarificó por la alta Corporación que tal postura se predica también, para cuando no existe compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, en la medida que no sería proporcional privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Rivera Castaño una convivencia ininterrumpida de por lo menos 5 años anteriores a la muerte o en cualquier tiempo, encontrándose debidamente acreditada la calidad de cónyuge de la actora por medio del registro civil de matrimonio que da cuenta de su celebración dada el 17 de diciembre de 1966 (Pág. 32 Archivo 01).

Para tal efecto, fue recepcionada la prueba testimonial compuesta por LUZ HELENA PÉREZ RUIZ, quien adujo que conoce a la pareja desde niña por ser del mismo barrio y criarse con uno de los 10 hijos procreados. Señaló que el señor Rivera para el año 88 empezó a irse de la casa, pero seguía respondiendo por la obligación e iba a visitar a Martha, lo que conoció porque lo veía en el lugar de residencia de ella. Que para el momento de la muerte estaba conviviendo con Luz Deira, cuya etapa de enfermedad fue cuidada por su nueva familia y Martha Luz lo visitaba.

También se cuenta con los registros civiles de nacimiento de 4 de los hijos procreados por la pareja entre 1967 y 1976 (Págs. 35-38 Archivo 01) lo que corrobora la vigencia del vínculo para esa época, prueba con la que puede concluirse de manera fehaciente que si bien no existió una convivencia en el sentido estricto impuesto por el legislador y la jurisprudencia hasta el momento en que ocurrió el evento desafortunado, pues así se desprende del dicho mismo de la suplicante cuando adujo sobre la separación presentada desde 1989, al tratarse de una cónyuge separada de hecho con un tiempo de convivencia de más de 5 años en cualquier tiempo, se habilita la posibilidad para acceder a la pensión de sobrevivientes pues ello lo permite es la subsistencia del vínculo matrimonial hasta cuando acaeció la defunción, por lo que estando por fuera de cualquier discusión la celebración del matrimonio el 17 de diciembre de 1966 sin separación surgida hasta 1988-1989 aproximadamente, cuya vigencia de la unión se mantuvo hasta el fallecimiento, existe plena claridad de la satisfacción del requisito de convivencia para su particular, lo que deja ver que ha quedado debidamente demostrada la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante en su calidad de cónyuge separada de hecho.

En lo que atañe al monto de la pensión, se tiene que el mismo se define en igual monto al que percibía el pensionado fallecido en tanto el derecho se sustituye en iguales condiciones a las de la pensión de vejez, por lo que al otorgarse una prestación en cuantía de \$545.242 para el año 2006, corresponde a \$864.896 para el año 2017 a partir de cuando se dispuso su disfrute como bien se definió en primera instancia, data que se determinó por incumbir a la de la muerte de Luz Deira Hernández sin que al respecto se predicara oposición, retroactivo pensional que calculado a febrero de 2020 con base a 13 mesadas anuales ordenadas, asciende a \$30.032.084 como fue delimitado, condena que extendida a septiembre de 2022 a satisfacción de lo reglado en el artículo 283 del CGP asciende a \$62.687.662 como se detalla a continuación, monto del que en efecto deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia SL7061-2016, debiendo continuarse pagando a partir del 01 de octubre de 2022 una mesada pensional equivalente a \$1.034.781 sin perjuicio de los incrementos de ley y del tope mínimo definido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993.

AÑO	VR. MESADA	Nº MESADA	TOTAL
2017	\$ 864.896	5	\$ 4.324.482
2018	\$ 900.271	13	\$ 11.703.518
2019	\$ 928.899	13	\$ 12.075.690
2020	\$ 964.197	13	\$ 12.534.566
2021	\$ 979.721	13	\$ 12.736.373
2022	\$ 1.034.781	9	\$ 9.313.032
		TOTAL	\$ 62.687.662

Sobre estos guarismos no se permitió transcurrir el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS para que opere la prescripción atendiendo la fecha de disfrute ordenada, pues la reclamación

ante la demandada la efectuó la demandante el 07 de septiembre de 2017 y la demanda fue presentada el 15 de enero de 2018.

La orden de indexación debe mantenerse, que no es una condena en sí misma considerada, sino que con ella se surte la corrección monetaria a fin de solucionar el detrimento económico cuando no se pagan oportunamente las prestaciones del Sistema sin miramientos de la buena o mala fe de las partes. Indexación que deberá ser calculada hasta el momento del pago efectivo de la obligación que aquí se impone frente a cada mesada.

En lo que atañe a las costas procesales impuestas a Colpensiones, debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien fue vencido en juicio conforme lo pregonan el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a los resultados del proceso, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente frente a la demandante a Colpensiones le fue resuelta la Litis desfavorablemente (Ver SL947-2021 y AL471-2018). Y es que la finalidad de las costas procesales es cubrir las erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, por lo que teniendo absoluta injerencia Colpensiones en el derecho concedido, los gastos del polo activo dentro de este trámite deben ser asumidos por el extremo pasivo.

Conforme a lo expuesto, se procederá a confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia venida en apelación y Consulta.

En esta instancia acorde a lo que tiene previsto el artículo 365-3 del CGP las costas estarán a cargo de Colpensiones, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE** la sentencia venida en

apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas, con la precisión que el monto debido hasta el mes de septiembre de 2022 asciende a la suma de \$62.687.662, debiendo continuarse pagando a partir del 01 de octubre de 2022 una mesada pensional equivalente a \$1.034.781 sin perjuicio de los incrementos de ley y del tope mínimo definido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993.

Costas de la instancia a cargo de Colpensiones. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.000.000.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501220180001401
Proceso: Ordinario
Demandante: MARTA LUZ GOMEZ DE RIVERA
Demandado: COLPENSIONES
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 21/10/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/10/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario